

Más allá de las armas: la CNEB, los entramados territoriales y los desafíos de la construcción de paz en el Pacífico colombiano

LEONARDO GONZÁLEZ PERAFÁN



Más allá de las armas: la CNEB, los entramados territoriales y los desafíos de la construcción de paz en el Pacífico colombiano

*Por: Leonardo González Perafán
Director de INDEPAZ*

INTRODUCCIÓN

La aparición de la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (CNEB) constituye una de las expresiones más recientes de las transformaciones que viene experimentando el conflicto armado colombiano. Surgida tras la ruptura de sectores de la Segunda Marquetalia y conformada principalmente por la articulación entre la Coordinadora Guerrillera del Pacífico y los Comandos de la Frontera, esta organización ha logrado consolidar presencia en regiones estratégicas de Nariño y Putumayo, dos territorios donde convergen algunas de las principales economías ilegales del país y donde persisten profundas debilidades en la capacidad estatal para transformar las condiciones de vida de las comunidades.

Sin embargo, el caso de la CNEB plantea preguntas que van más allá de la trayectoria de una organización armada específica. Su surgimiento, expansión y capacidad de adaptación obligan a preguntarse por qué, después de casi una década de la firma del Acuerdo de Paz con las FARC-EP, continúan existiendo territorios donde las economías ilegales, la violencia armada y diversas formas de regulación social siguen ocupando un lugar central en la vida cotidiana de las comunidades.

Este artículo parte de una idea sencilla: para comprender fenómenos como la CNEB no basta con analizar a los actores armados. También es necesario observar los territorios donde operan, las economías que los sostienen, las relaciones sociales y políticas que les permiten consolidarse y las condiciones históricas que explican su permanencia. En otras palabras, más que centrarse exclusivamente en la organización armada, es necesario comprender el contexto que hace posible su existencia.

Las reflexiones que siguen se apoyan en conversaciones con líderes y lideresas sociales, organizaciones comunitarias e instituciones presentes en la región, así como en el análisis de la evolución reciente de la CNEB y de los territorios donde ejerce influencia. Más que ofrecer una caracterización exhaustiva de la organización, el propósito es contribuir a una discusión más amplia sobre los desafíos de la construcción de paz en contextos donde el problema no se reduce a la presencia de grupos armados, sino que involucra complejas dinámicas económicas, sociales e institucionales que continúan alimentando la persistencia y reconfiguración de la violencia.

MÁS ALLÁ DE LAS ARMAS

LA CNEB EN EL PACÍFICO COLOMBIANO: UN ENTRAMADO DE PODER, ECONOMÍAS E INSTITUCIONES



Infografía desarrollada con IA

LA CONSTRUCCIÓN DE UNA ARTICULACIÓN ARMADA REGIONAL

La actual Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (CNEB) no surgió de la nada ni puede entenderse simplemente como una nueva disidencia de las antiguas FARC. Su origen está asociado a un proceso de reconfiguración de estructuras armadas que venían operando desde hace años en el Pacífico nariñense y en la frontera sur del país, especialmente en Nariño y Putumayo.

Durante varios años, estas estructuras hicieron parte de la Segunda Marquetalia, la organización creada por Iván Márquez tras su regreso a las armas en 2019. Sin embargo, las diferencias internas sobre el rumbo político y militar de la organización, así como sobre la conducción de las negociaciones con el Gobierno Nacional, terminaron produciendo una fractura. A finales de 2024, sectores de la antigua Segunda Marquetalia decidieron separarse y continuar de manera autónoma el proceso de diálogo, dando origen a la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano bajo la vocería de Walter Mendoza.

La nueva organización quedó integrada principalmente por dos grandes procesos armados regionales. Por un lado, los Comandos de la Frontera, con una trayectoria marcada por su vinculación a economías ilegales y redes criminales en la frontera con Ecuador y Perú. Por otro, la Coordinadora Guerrillera del Pacífico, una articulación de estructuras presentes en Tumaco, Barbacoas y el Triángulo de Telembí, donde convergieron grupos como los frentes Iván Ríos, Oliver Sinisterra, Ariel Aldana, Mariscal Sucre y Alfonso Cano, entre otros.

Sin embargo, interpretar este proceso únicamente como una división entre facciones guerrilleras sería quedarse en la superficie del problema. La consolidación de la CNEB ocurrió en territorios donde ya existían complejas economías asociadas a la coca, la minería de oro, el contrabando y diversos circuitos de comercio legal e ilegal que conectan la región con mercados nacionales e internacionales.

Por ello, más que una simple recomposición insurgente, la creación de la CNEB refleja la convergencia de estructuras armadas que durante años construyeron formas de control sobre corredores estratégicos, economías ilegales y mercados regionales. Varias de estas estructuras comenzaron a desempeñar funciones relacionadas con la regulación de economías ilícitas, el control de rutas y la prestación de seguridad para distintos actores vinculados a esos mercados.

Esta característica ayuda a explicar por qué la CNEB no funciona como una organización homogénea y centralizada. Más bien se asemeja a una articulación de estructuras regionales con génesis, trayectorias, intereses y dinámicas territoriales distintas, unidas por su participación en una misma mesa de negociación.

Esta heterogeneidad también plantea desafíos para la negociación. A diferencia de organizaciones más centralizadas, la CNEB reúne estructuras con trayectorias, economías y contextos territoriales distintos. Mientras los Comandos de la Frontera construyeron buena parte de su influencia alrededor de corredores transfronterizos en Putumayo, las estructuras agrupadas en la antigua Coordinadora Guerrillera del Pacífico están más vinculadas a las dinámicas de la coca, la minería y el control territorial en la costa pacífica nariñense. Esta diversidad obliga a pensar la paz no como una fórmula única para toda la organización, sino como un proceso con fuertes componentes territoriales.



Infografía desarrollada con IA

La persistencia de la violencia bajo nuevas formas

Uno de los fenómenos más complejos de entender en la costa pacífica nariñense es que la disminución de los homicidios no necesariamente ha significado una reducción proporcional de la violencia. Por el contrario, múltiples voces de líderes sociales, autoridades comunitarias y comunidades de la región coinciden en señalar que, mientras los asesinatos han disminuido en comparación con los años de confrontación abierta entre grupos armados, las desapariciones forzadas se han convertido en una práctica cada vez más frecuente para controlar a la población y resolver conflictos.

Gobernanza se trata de un fenómeno difícil de medir. A diferencia del homicidio, la desaparición forzada deja menos rastros estadísticos y enfrenta enormes barreras para su denuncia. Muchas familias simplemente no reportan los hechos por miedo a represalias. Otras saben o sospechan quiénes son los responsables, pero entienden que acudir a las autoridades puede aumentar el riesgo para ellas o para otros miembros de la comunidad. En consecuencia, buena parte de estos casos permanecen en el silencio, en conversaciones privadas o en relatos que circulan dentro de las comunidades, pero que nunca llegan a convertirse en denuncias formales.

Sin embargo, el hecho de que no existan denuncias no significa que el fenómeno no exista. Por el contrario, durante recorridos territoriales y conversaciones sostenidas con habitantes de la región, la referencia a personas desaparecidas aparece de manera recurrente. En muchos casos, las comunidades afirman conocer quién fue llevado, cuándo ocurrió y cuál pudo haber sido el motivo, pero al mismo tiempo reconocen que no existen condiciones para denunciar ni para exigir respuestas.

Lo preocupante es que este fenómeno ocupa un lugar marginal en las discusiones públicas sobre seguridad o en la misma mesa de diálogos y sus mecanismos de seguimiento. Mientras la reducción de homicidios suele presentarse como uno de los principales indicadores para evaluar avances o retrocesos en un territorio, las desapariciones forzadas rara vez reciben el mismo nivel de atención. No existen exigencias equivalentes, mecanismos robustos de verificación o debates permanentes sobre la necesidad de reducir este tipo de violencia como condición para avanzar en los procesos de negociación.

Esta situación puede producir una lectura incompleta de la realidad territorial. Un territorio puede mostrar una disminución de homicidios y, al mismo tiempo, experimentar altos niveles de control armado, restricciones a las libertades, amenazas, desapariciones forzadas y mecanismos de coerción que no aparecen reflejados en las estadísticas tradicionales. En esos contextos, la aparente reducción de la violencia puede ocultar una transformación en sus modalidades más que una desaparición de esta.

Por eso resulta necesario ampliar la mirada. La pregunta no debería ser únicamente cuántas personas están siendo asesinadas o desplazadas, sino también cuántas están desapareciendo, cuántas comunidades viven bajo miedo permanente, cuántas personas han dejado de denunciar y hasta qué punto las formas menos visibles de violencia están sustituyendo las expresiones más abiertas de la confrontación armada.

De lo contrario, existe el riesgo de confundir una disminución de los homicidios con una verdadera ampliación de las libertades y de las garantías para la población civil. Y son precisamente esas libertades, más que cualquier indicador aislado, las que deberían constituir la medida principal del éxito de cualquier esfuerzo de construcción de paz.

En contextos donde desaparecen las personas pero también desaparece la posibilidad de denunciar, las cifras dejan de reflejar completamente la magnitud de la violencia.

Más allá de la gobernanza criminal: mirar la película completa

Uno de los principales desafíos para comprender lo que ocurre hoy en regiones como el Pacífico nariñense es apartarse de la tendencia a explicar la realidad exclusivamente a partir de la presencia de los grupos armados. Durante los últimos años se han popularizado conceptos como "gobernanza armada", "gobierno armado" o "gobernanza territorial"[1], que sin duda ayudan a describir parte del fenómeno. Sin embargo, también corren el riesgo de simplificarlo y quedarse cortos frente a la complejidad de los procesos que ocurren en los territorios.

El problema de estas categorías es que muchas veces terminan concentrando toda la atención en la organización armada y en sus mecanismos de coerción, como si el grupo fuera el único actor relevante en la producción del orden local. Es una mirada que se enfoca en la fotografía del hombre armado, pero que deja por fuera la película completa.

Cuando se observa con detenimiento lo que ocurre en territorios como Tumaco, Barbacoas, el Triángulo de Telembí o Putumayo, resulta evidente que el poder no descansa únicamente en quienes portan las armas. Pero esta realidad no es exclusiva de las zonas donde hoy tiene influencia la CNEB.

Dinámicas similares pueden encontrarse en regiones tan diversas como el Catatumbo, el norte del Cauca, el Bajo Cauca antioqueño, el Caribe, el sur de Córdoba, algunas zonas del Pacífico chocoano o la frontera entre Arauca y Venezuela. En todos estos territorios, el orden local no es producido exclusivamente por un grupo armado, sino por la interacción de múltiples actores que ejercen distintos niveles de influencia sobre la vida económica, social y política.

[1] Fundación Ideas para la Paz 2026. Análisis de coyuntura electoral. Seguridad 2026-2030: ¿Cómo leer las propuestas de los candidatos a la Presidencia de Colombia?

Alrededor de las estructuras armadas existe una compleja red de relaciones sociales, económicas, políticas e institucionales que contribuyen a reproducir ese orden territorial. Comerciantes, intermediarios del oro, la coca o el contrabando, autoridades locales, organizaciones comunitarias, actores políticos, empresas legales e ilegales, funcionarios estatales y redes transnacionales participan, en distintos niveles y con diferentes grados de responsabilidad, en sistemas que permiten la reproducción de economías y formas de regulación que van mucho más allá del grupo armado.

Por eso, cuando se analiza exclusivamente la presencia de una organización armada, se corre el riesgo de confundir una parte del fenómeno con el fenómeno completo. El grupo armado puede ser el actor más visible, pero rara vez explica por sí solo la manera como funciona el territorio. Resulta más útil hablar de “entramados” [2] o de regímenes de poder violento[3], entendidos como sistemas complejos de relaciones donde actores armados, instituciones estatales, organizaciones sociales, economías legales e ilegales y diversos intereses políticos interactúan de manera permanente. En estos contextos, las fronteras entre lo legal, lo ilegal y lo criminal suelen ser difusas, y el orden territorial termina siendo el resultado de múltiples relaciones de poder que van mucho más allá de la organización armada.

Desde esta perspectiva, el actor armado es apenas una de las patas de la mesa. Es probablemente la más visible y la que concentra la atención de los medios y del Estado, pero difícilmente explica por sí sola la manera como funciona el territorio.

[2] Comisión de la Verdad 2022. El concepto de "entramados paramilitares" fue clave en el Informe Final de la Comisión de la Verdad para explicar que el paramilitarismo no fue solo un grupo de actores armados, sino una compleja red de complicidades. Se trató de una alianza criminal diseñada para despojar tierras y controlar territorios.

[3] González Posso Camilo, 2026 Entre el Régimen de poder violento y la paz ambiental esquiva. <https://indepaz.org.co/amazonia-cautiva/>

MÁS ALLÁ DE LA GOBERNANZA CRIMINAL: MIRAR LA PELÍCULA COMPLETA

El actor armado es solo una de las piezas de un sistema más amplio de relaciones, economías e instituciones que configuran el poder territorial.



EL ACTOR ARMADO ES SOLO UNA DE LAS PATAS DE LA MESA.

Entender el territorio exige mirar la película completa para transformar las condiciones que permiten la persistencia y reproducción de la violencia.



La paz territorial requiere presencia integral del Estado, justicia, oportunidades y reconocimiento de las comunidades para desmontar las estructuras que sostienen el poder armado y construir territorios dignos y en paz.

La noción de macrocriminalidad resulta especialmente útil para entender este fenómeno[4]. La violencia no puede analizarse únicamente a partir de los autores materiales o de las estructuras armadas visibles. Es necesario identificar los sistemas económicos, políticos e institucionales que permiten que esa violencia se produzca, se reproduzca y, en muchos casos, genere beneficios para múltiples actores. En otras palabras, no basta con preguntarse quién ejerce la violencia; también es necesario comprender quiénes se benefician de ella, quiénes la facilitan, quiénes la toleran y cuáles son las estructuras que permiten su permanencia en el tiempo.

[4] Salinas Abdala Yamile, 2021 Macrocriminalidad con licencia legal Urabá-Darién 1980-2014 <https://indepaz.org.co/portfolio/macrocriminalidad-con-licencia-legal-uraba-darien-1980-2014/>

Por esa razón, limitar el análisis a la llamada gobernanza armada puede conducir a diagnósticos incompletos y, en consecuencia, a respuestas igualmente incompletas. Si el problema se reduce al grupo armado, la solución parecerá ser exclusivamente militar o exclusivamente negociada. Pero si el problema es un entramado territorial mucho más amplio, las respuestas deben incluir transformaciones económicas, institucionales y sociales de largo plazo.

Además, la propia noción de gobernanza armada presenta una segunda limitación. Con frecuencia transmite la idea de que los grupos armados sustituyen completamente al Estado y se convierten en la autoridad exclusiva del territorio. Sin embargo, esa no suele ser la realidad de buena parte de las regiones afectadas por el conflicto armado en Colombia.

En la mayoría de estos territorios siguen existiendo escuelas, puestos de salud, alcaldías, inspecciones de policía, programas sociales, organizaciones comunitarias y múltiples expresiones de institucionalidad estatal. Profesores, médicos, funcionarios públicos, autoridades étnicas, líderes sociales y organizaciones comunitarias continúan desempeñando funciones esenciales para la vida cotidiana de las comunidades. El Estado no desaparece completamente ni es reemplazado de manera absoluta por los actores armados.

Lo que ocurre es algo más complejo: una convivencia conflictiva entre distintos centros de poder que interactúan, se tensionan, negocian y, en ocasiones, se complementan. Los grupos armados pueden influir sobre decisiones comunitarias, regular ciertas actividades económicas o imponer normas de comportamiento, pero rara vez ejercen un control absoluto sobre todos los aspectos de la vida social. Del mismo modo, la presencia institucional no significa necesariamente que el Estado tenga la capacidad de regular plenamente el territorio.

Por eso, el problema no es la ausencia absoluta del Estado ni la existencia de un gobierno exclusivo de los grupos armados. Lo que encontramos es la coexistencia de múltiples actores con capacidad de regulación sobre el mismo territorio y sobre la misma población. La vida política, económica y social se configura a partir de la interacción permanente entre instituciones estatales, organizaciones comunitarias, actores económicos legales e ilegales y estructuras armadas.

Más que territorios gobernados exclusivamente por actores armados, muchas regiones de Colombia funcionan como regímenes locales de poder donde confluyen, cooperan, compiten y se disputan influencia instituciones estatales, organizaciones comunitarias, actores económicos y estructuras armadas. Entender esa complejidad no es un asunto meramente académico. De ello depende la posibilidad de diseñar respuestas que transformen las causas profundas del conflicto y no únicamente a sus expresiones armadas más visibles.

La economía política del conflicto

Quizás una de las principales lecciones que deja el caso de la CNEB es que el análisis de los grupos armados ya no puede limitarse a sus estructuras militares, sus discursos políticos o sus capacidades de coerción. Para entender realmente su permanencia y capacidad de adaptación es necesario observar las economías que sostienen su funcionamiento y los intereses que se han consolidado alrededor de ellas.

En los territorios donde hoy tiene presencia la CNEB convergen algunas de las economías ilegales más dinámicas del país. En el Pacífico nariñense, particularmente en municipios como Tumaco y Barbacoas, la coca y la minería de oro constituyen desde hace años las principales fuentes de acumulación económica. En Putumayo, la cercanía con Ecuador y Perú ha fortalecido corredores asociados al narcotráfico, el contrabando y otras economías transfronterizas que conectan los mercados ilegales locales con circuitos internacionales.

Las propias conversaciones sostenidas con líderes sociales de la región muestran que buena parte de las disputas y acuerdos entre actores armados tienen como telón de fondo el control de estas economías. El oro, la coca, las rutas de movilidad, los corredores fluviales y los mecanismos de comercialización son hoy tan importantes como las disputas políticas o ideológicas que históricamente caracterizaron al conflicto armado colombiano.

Esto ayuda a entender por qué muchas de estas estructuras han logrado sobrevivir a operaciones militares, capturas de mandos e incluso a profundas divisiones internas. La fragmentación de la Segunda Marquetalia y el posterior surgimiento de la CNEB son un ejemplo de ello. Más allá de las diferencias entre comandantes o de las disputas por la conducción política del proceso, las economías que sustentan a estas organizaciones continuaron operando. Las rutas permanecieron, los mercados siguieron funcionando y las fuentes de financiación conservaron buena parte de su capacidad de generación de recursos.

En este sentido, la economía de guerra parece haber adquirido una autonomía creciente frente al proyecto político armado. Mientras que en otros momentos de la historia del conflicto las economías ilegales podían entenderse como instrumentos al servicio de una estrategia político-militar, hoy la evidencia sugiere que buena parte de estas estructuras operan cada vez más como administradoras armadas de economías ilegales y como proveedoras de protección para redes criminales y actores económicos que dependen de ellas. Las armas siguen teniendo un discurso político, pero su función principal parece estar cada vez más asociada a garantizar el funcionamiento de determinados negocios ilícitos.

La experiencia colombiana muestra que el desarme de una organización armada no siempre viene acompañado de cambios profundos en las economías que operan en los territorios. Cuando persisten las mismas rentas ilegales, los mismos corredores estratégicos y las mismas condiciones de exclusión estatal, los incentivos para que surjan nuevos actores o se reconfiguren los existentes continúan presentes.

Por ello, uno de los principales límites de las respuestas tradicionales al conflicto es que suelen concentrarse en los actores armados visibles sin intervenir de manera suficiente las dinámicas económicas que les permiten reproducirse. Las operaciones militares pueden afectar temporalmente las estructuras armadas. Los procesos de negociación pueden abrir oportunidades para la reducción de la violencia.

Sin embargo, mientras las economías ilegales continúen ofreciendo altos niveles de rentabilidad, capacidad de regulación territorial y posibilidades de acumulación de capital, y mientras no exista una presencia estatal capaz de transformar las condiciones estructurales de exclusión, pobreza, débil institucionalidad y dependencia económica que las sostienen, las condiciones que favorecen la persistencia y reconfiguración del conflicto seguirán presentes.

La pregunta de fondo no es únicamente cómo desarmar a una organización, sino cómo transformar las economías que hacen posible que nuevas organizaciones armadas surjan, se financien y ejerzan influencia sobre amplias regiones del país.

En el caso de la CNEB, como en buena parte de las estructuras armadas postacuerdo 2016, la respuesta a esta pregunta resulta tan importante como cualquier discusión sobre el futuro de las negociaciones o sobre el destino de sus mandos. Sin embargo, aquí aparece uno de los principales desafíos del proceso actual: la transformación de las economías y de las dinámicas territoriales no puede construirse exclusivamente alrededor de una mesa entre el Gobierno y un actor armado.



La experiencia colombiana demuestra que los acuerdos pueden contribuir a reducir la violencia y abrir oportunidades para la paz, pero difícilmente transforman por sí solos las condiciones que dieron origen al conflicto. Esa transformación requiere la participación activa de las comunidades, de las autoridades locales, de las organizaciones sociales, de los pueblos indígenas y afrodescendientes, de los sectores productivos y de la institucionalidad que permanece en los territorios.

En regiones como Tumaco, Barbacoas, el Triángulo de Telembí o Putumayo, la discusión no debería limitarse a qué ocurrirá con los combatientes o cuáles serán las condiciones jurídicas de la organización. La pregunta de fondo es qué modelo económico, qué formas de participación política y qué alternativas de desarrollo quieren construir las comunidades que han vivido durante décadas en medio de la guerra y de las economías ilegales.

En ese sentido, uno de los vacíos más notorios del proceso con la CNEB ha sido la limitada participación de la sociedad civil en la definición de las transformaciones territoriales que deberían acompañar cualquier acuerdo. La paz no puede entenderse únicamente como un pacto entre quienes ejercen la violencia y el Estado. La paz se construye, sobre todo, con quienes han soportado sus consecuencias y con quienes permanecerán en el territorio mucho después de que terminen las negociaciones.

Porque al final, los grupos armados pueden desmovilizarse, fragmentarse o cambiar de nombre. Quienes permanecen son las comunidades. Y si las comunidades no participan de manera efectiva en la definición del futuro de sus territorios, existe el riesgo de que las negociaciones produzcan cambios en los actores armados sin generar transformaciones profundas en las condiciones que han alimentado históricamente el conflicto.



Los límites de una negociación centrada en los actores armados

La mesa de diálogos entre el Gobierno Nacional y la CNEB representa un esfuerzo importante por reducir la violencia y abrir caminos para la construcción de paz en territorios históricamente afectados por el conflicto armado. Sin embargo, el análisis de las dinámicas presentes en Nariño y Putumayo permite advertir una tensión que atraviesa no solo este proceso, sino buena parte de las negociaciones desarrolladas en Colombia durante las últimas décadas: la tendencia a concentrar la discusión en los actores armados y en sus condiciones de tránsito a la legalidad, dejando en un segundo plano las transformaciones territoriales que deberían constituir el centro de cualquier proceso de paz.

Buena parte de los debates públicos alrededor de la mesa con la CNEB se han concentrado en asuntos como los mecanismos de concentración o Zonas de Ubicación Temporal (ZUT), las garantías jurídicas, las órdenes de captura, la situación de sus comandantes o las condiciones para una eventual dejación de armas. Todos estos temas son importantes. Sin embargo, existe el riesgo de que la negociación termine girando principalmente alrededor de las necesidades e intereses de los actores armados, mientras las comunidades que han vivido durante décadas las consecuencias de la guerra ocupan un papel secundario en la definición de los cambios que requiere el territorio.

Este riesgo resulta especialmente evidente en regiones como Tumaco, Barbacoas, el Triángulo de Telembí o Putumayo, donde los problemas centrales no se limitan a la existencia de una organización armada. Las comunidades enfrentan desafíos relacionados con la dependencia económica de la coca y la minería, la ausencia de infraestructura, la limitada presencia de servicios públicos, las dificultades de acceso a mercados legales, la debilidad institucional y las múltiples formas de exclusión histórica que han caracterizado estos territorios. Ninguno de estos problemas se resolverá exclusivamente mediante un acuerdo con una organización armada.

La experiencia colombiana muestra que los procesos de paz más exitosos son aquellos que logran transformar las condiciones que alimentan la violencia y no únicamente las organizaciones que la ejercen. En ese sentido, la pregunta principal no debería ser solamente qué ocurrirá con los integrantes de la CNEB una vez concluya la negociación, sino qué ocurrirá con los territorios donde la organización ha construido su influencia y con las comunidades que continuarán habitándolos mucho después de que los combatientes hayan dejado las armas o se hayan reincorporado.

Por ello, uno de los principales desafíos del proceso actual consiste en ampliar los espacios de participación efectiva de las comunidades, las organizaciones sociales, los pueblos indígenas, los consejos comunitarios afrodescendientes, las autoridades locales y los sectores económicos presentes en la región. La transformación territorial no puede ser definida exclusivamente desde una mesa entre el Estado y un actor armado. Debe construirse a partir de las necesidades, expectativas y propuestas de quienes viven diariamente las consecuencias de la violencia y de quienes seguirán allí cuando termine la negociación.

La paz territorial exige reconocer que los grupos armados son actores relevantes del conflicto, pero no necesariamente los actores más importantes para definir el futuro de una región. Las organizaciones armadas pueden fragmentarse, transformarse, desmovilizarse o desaparecer. Las comunidades permanecen. Por ello, una negociación que aspire a producir cambios duraderos debe mirar más allá del desarme y de las condiciones jurídicas de los combatientes, e incorporar de manera mucho más decidida las voces y los proyectos de quienes han construido históricamente estos territorios.

En últimas, la sostenibilidad de cualquier acuerdo con la CNEB dependerá menos de lo que ocurra en la mesa de negociación y más de la capacidad de generar transformaciones reales en los territorios. La paz no se construye únicamente hablando con quienes portan las armas. Se construye, sobre todo, escuchando a quienes han vivido bajo su influencia y creando las condiciones para que sean las comunidades quienes definan el rumbo de su propio futuro.



Conclusiones

El caso de la CNEB muestra que las transformaciones recientes del conflicto armado colombiano exigen marcos de análisis más complejos que los utilizados en ciclos anteriores de violencia. Categorías como insurgencia, criminalidad organizada o gobernanza armada resultan insuficientes para explicar fenómenos donde convergen economías ilegales, actores armados, instituciones estatales, organizaciones sociales y diversos intereses económicos.

La experiencia de esta organización también evidencia que la reducción de los homicidios no necesariamente significa una disminución integral de la violencia. Las desapariciones forzadas, el miedo a denunciar y otras formas menos visibles de control continúan afectando a las comunidades, aun cuando las cifras tradicionales de seguridad parezcan mostrar mejoras.

Asimismo, el caso de la CNEB permite observar cómo las economías asociadas a la coca, la minería ilegal y los corredores estratégicos han adquirido una enorme capacidad de adaptación. Los grupos armados pueden fragmentarse, cambiar de nombre o incluso negociar, pero las dinámicas económicas que los sostienen suelen permanecer. Por ello, la construcción de paz no puede limitarse al desarme de una organización ni a la firma de acuerdos.

El principal desafío sigue siendo la transformación de los territorios. Mientras persistan economías ilegales altamente rentables y no existan alternativas económicas, sociales e institucionales capaces de disputarlas, los riesgos de reconfiguración de la violencia continuarán presentes.

Finalmente, la experiencia de la mesa con la CNEB deja una lección fundamental: la paz no puede construirse únicamente dialogando con los actores armados. La paz duradera se construye, sobre todo, escuchando e incorporando a las comunidades que han vivido el conflicto y que seguirán habitando esos territorios mucho después de que terminen las negociaciones.

Quizás la principal pregunta que deja el caso de la CNEB no es qué ocurrirá con esta organización en los próximos años. La pregunta es si Colombia será capaz de transformar los territorios donde surgen y se reproducen este tipo de estructuras. Mientras esa pregunta siga sin respuesta, el riesgo de nuevas reconfiguraciones de la violencia continuará presente.

La paz territorial exige reconocer que los grupos armados son actores relevantes del conflicto, pero no necesariamente los actores más importantes para definir el futuro de una región. Las organizaciones armadas pueden fragmentarse, transformarse, desmovilizarse o desaparecer. Las comunidades permanecen. Por ello, una negociación que aspire a producir cambios duraderos debe mirar más allá del desarme y de las condiciones jurídicas de los combatientes, e incorporar de manera mucho más decidida las voces y los proyectos de quienes han construido históricamente estos territorios.

En últimas, la sostenibilidad de cualquier acuerdo con la CNEB dependerá menos de lo que ocurra en la mesa de negociación y más de la capacidad de generar transformaciones reales en los territorios. La paz no se construye únicamente hablando con quienes portan las armas. Se construye, sobre todo, escuchando a quienes han vivido bajo su influencia y creando las condiciones para que sean las comunidades quienes definan el rumbo de su propio futuro.



Observatorio de
Conflictividades
y DDHH de
INDEPAZ



indepaz

www.indepaz.org.co